

TRABAJO PRÁCTICO N° 9: "La década infame: Restauración Conservadora.

Fecha de entrega: 08/09



Marco teórico:

EL PRIMER GOLPE DE ESTADO EN LA ARGENTINA. LA DICTADURA MILITAR DE URIBURU.

Así como los problemas económicos, los aires autoritarios también cruzaban el mundo. Como ya se anticipó, en septiembre de 1930, en la Argentina, un sector de las Fuerzas Armadas liderado por el general José Félix Uriburu, tomó por la fuerza el poder del Estado. El primer golpe militar contra la democracia fue motorizado por un grupo minúsculo de cadetes militares pero contó con el apoyo de grupos civiles, como el de los poderosos terratenientes pampeanos, así como con la adhesión de algunos escritores, periodistas, empresarios y políticos vinculados tradicionalmente con la oligarquía, y el apoyo de radicales anti-yrigoyenistas, unidos todos en contra del gobierno y por lo que ellos llamaban “la Revolución”.

En general, cuando se rompe el orden constitucional, hay una serie de figuras visibles, pero es importante reconocer que nunca actúan solas. Por ejemplo, es imposible pensar el desarrollo del nazismo sólo a través del accionar de Adolfo Hitler. De igual modo, en el golpe de Estado de 1930 y en la dictadura que lo continuó, participaron distintos grupos de civiles, además de los militares que lo ejecutaron. Por esta razón, es que en las Ciencias Sociales se habla de golpes de Estado cívico-militares, así como de dictaduras cívico-militares.

Para derrocar al presidente Yrigoyen, los sectores dominantes, que controlaban los principales diarios y revistas de la época, apelaron a una campaña de desprestigio que ponía en duda las capacidades del presidente, así como la moralidad de los funcionarios gubernamentales. Hay historiadores que resaltan también la colaboración de capitalistas extranjeros en el derrocamiento de Yrigoyen, sobre todo la de algunos grupos de inversores, preocupados por una iniciativa del gobierno radical para la nacionalización definitiva de los hidrocarburos. La dictadura encabezada por el general Uriburu inauguró técnicas que se continuarían en dictaduras posteriores. Durante su gobierno, se intervinieron provincias, fábricas y universidades; se iniciaron prácticas de tortura, persecución, censura y asesinato de opositores, es decir, se avanzó contra las libertades y los derechos de la ciudadanía, mientras que se hacía pública la fuerte adhesión de una parte de los golpistas a la fe católica, al orden y a las ideas de corte fascista que triunfaban en Europa. Uriburu contó con el apoyo de la Legión Cívica, un grupo paramilitar, que se inspiraba en los fascistas italianos. Los llamados “camisas negras criollas” garantizaban el orden a través de la delación de opositores, de secuestros, persecuciones y amenazas. Los gobiernos autoritarios mantienen una contradicción permanente en sus discursos: sostienen, por ejemplo, que interrumpen el orden democrático y constitucional “por el bien de la patria”. Para poder convalidar el discurso de la “necesidad de interrumpir el orden democrático, por y para la patria”, el gobierno de Uriburu recurrió, paradójicamente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, uno de los tres poderes que, en la teoría, garantizan el funcionamiento de la democracia. No olvidemos una de las enseñanzas principales de los revolucionarios franceses de 1789: el poder debe estar dividido para que no sea monopolizado por un tirano. El Ejecutivo, ejecuta políticas en el marco de la ley; el Legislativo hace las normas y el Judicial garantiza su cumplimiento. En la Argentina, en contradicción con tales principios, la Corte Suprema, encargada de garantizar el funcionamiento del orden democrático, avaló el golpe de Estado de 1930; le dio “legitimidad”

EL GOBIERNO DE FACTO ABRE EL CAMINO A LA RESTAURACIÓN OLIGÁRQUICA. LA DÉCADA INFAME

El gobierno de facto duró apenas poco más de un año. Una de las causas de su corta vida tuvo que ver con las diferencias al interior de los grupos que lo apoyaron. Un sector nacionalista, representado por una parte del ejército—entre otros, por quien ejercía la presidencia de la Nación, el general José Félix Uriburu— proponía la construcción de un sistema corporativista, similar al modelo italiano. Este grupo tenía ideas elitistas, antidemocráticas y anticomunistas. Pretendía establecer un régimen autoritario a través de la reforma de la Constitución y de la eliminación de los partidos políticos. Otro sector, el de los conservadores más tradicionales, estaba liderado por el general Agustín P. Justo. Heredero de los conservadores de la generación del 80, pretendía “salvar” la economía agroexportadora y restablecer la democracia, aunque fuera de manera formal. Este grupo gozaba del apoyo de los Estados Unidos y Gran Bretaña, es decir de los imperios “democráticos”, con lo cual la tensión dentro de la élite militar también reflejaba una discusión de la política a nivel global; de un lado, rodeando a Uriburu, los simpatizantes de los totalitarismos; del otro, en torno al general Justo, los adherentes a las viejas democracias liberales imperialistas. Los partidarios de Justo ganaron esta disputa y Uriburu se vio obligado a llamar a elecciones en 1932. En una alianza política denominada Concordancia, conocida popularmente como “el Contubernio”, se reunieron miembros de los partidos conservadores tradicionales de distintas provincias y radicales anti-personalistas (es decir, anti-yrigoyenistas) y proclamaron la candidatura de Justo. En las elecciones presidenciales de febrero de 1932, en las que el radicalismo se abstuvo de participar, Justo se impuso. El llamado a elecciones no significaba un retorno al régimen democrático sino a un régimen como el que había regido en la Argentina entre 1880 y 1916, es decir a un régimen político conservador u oligárquico. Se trataba de un retorno al

gobierno de los sectores con mayor poder económico a través de los medios tradicionales: el fraude, la corrupción y la represión. La Concordancia controló el Estado utilizando estas estrategias hasta 1943. Es por esto que se conoce este período como “década infame”. La oposición al régimen estuvo encabezada por los radicales yrigoyenistas, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Corrupción, fraude y represión El hecho de que se terminara el gobierno de facto y se convocara a elecciones fue simplemente una puesta en escena. Las Fuerzas Armadas, principalmente el ejército, tuvieron el poder real junto con los grandes capitales nacionales y extranjeros. La utilización sistemática del fraude, pese a la existencia de la Ley Sáenz Peña, ya no se ocultaba. De hecho, se justificaba y se sostenía sobre la idea de que la clase dirigente tenía la obligación de salvar a la patria del peligro comunista, de la ineficacia del yrigoyenismo y de la incapacidad de la democracia para sostener al país en tiempos de crisis. Es por eso que los representantes de la oligarquía hablaban de fraude “patriótico”, porque según su particular modo de ver las cosas el fraude era el único modo en que la patria podía salvarse de la incapacidad del pueblo para elegir correctamente a sus representantes. Mientras tanto, para apuntalar la gobernabilidad, seguía funcionando la Legión Cívica, persiguiendo y amenazando opositores, reprimiendo huelgas y protestas sociales. El período es testigo de uno de los fraudes económico-políticos más importantes que ha sufrido nuestro país, el pacto Roca- Runciman (1933), por el cual la Argentina accedía a un intercambio comercial en materia de carnes con Gran Bretaña que garantizaba enormes beneficios en materia arancelaria e impositiva a la nación imperialista. El pacto implicó también la concesión de una serie de negocios en áreas estratégicas de la economía argentina que reforzaba la dependencia. La Argentina pasaba así a convertirse formalmente en una suerte de neo-colonia inglesa; para muchos, era considerada como el sexto dominio británico. Un ejemplo más de los actos de corrupción llevados a cabo por los gobiernos de la Concordancia fueron los negociados que se hicieron desde el Estado para conservar la relación comercial con Gran Bretaña. En 1935, el senador santafesino por el Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre, denunció en el Congreso, luego de una exhaustiva investigación y provisto de valiosas pruebas, que los frigoríficos británicos llevaban una doble contabilidad. Para evadir impuestos, mostraban escasas ganancias o aun pérdidas. De la Torre descubrió que había una contabilidad paralela en donde los datos eran extraordinariamente favorables a las empresas frigoríficas británicas. Las denuncias acusaban de encubrimiento al ministro de Agricultura Luis Duhau y al ministro de Hacienda, Federico Pinedo. En plena sesión del Senado de la Nación, mientras De la Torre llevaba a cabo su denuncia y mostraba las pruebas, fue asesinado Enzo Bordabehere, compañero del orador. El disparo estaba destinado a De la Torre. En cualquier caso, fue una demostración de la falta de límites de los sectores más encumbrados de la Argentina para acallar las críticas y sostenerse en el poder.

En 1937 asumió la presidencia Roberto M. Ortiz, nuevamente a través del fraude electoral. Su vicepresidente, Ramón Castillo, representaba a los sectores conservadores tradicionales. Ambos, miembros de la Concordancia, tenían visiones diferentes. Si bien Ortiz había llegado al poder gracias a la utilización del fraude, buscaba dar legitimidad al gobierno y terminar con tal práctica. Pero en 1940, Ortiz enfermó y asumió la presidencia Castillo quien permaneció en el cargo hasta 1943, año en que fue depuesto por un nuevo golpe de Estado

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y EL NACIONALISMO ARGENTINO.

Durante la década del 30, el régimen nazi comenzó una política de avance imperialista por el continente europeo. En 1939 se desató la Segunda Guerra Mundial, en la que se enfrentaron los países nucleados en el Eje con otro grupo de naciones, conocido como el de los Aliados. El “Eje” estaba liderado por la Alemania Nazi, por Italia, bajo el mando de Mussolini, y por Japón. Por otra parte, Francia, la Unión Soviética e Inglaterra encabezaban al grupo de “los Aliados”. En la Argentina, el enfrentamiento bélico generó una serie de debates. En términos generales, se enfrentaron posturas contradictorias en torno a si nuestro país debía involucrarse o no en la contienda desatada en 1939. Los conservadores liberales argentinos opinaban que el apoyo a los aliados era fundamental para mantener las relaciones comerciales con el principal comprador de nuestras materias primas, Inglaterra. Asimismo, muchos conservadores nacionalistas y gran parte del Ejército, simpatizaban –como vimos en el caso de Uriburu– con los sistemas totalitarios europeos. Los conservadores nacionalistas tenían representantes en el gobierno, en el ejército, en el empresariado y contaban con el apoyo de algunos escritores como Leopoldo Lugones y Carlos Ibarguren. Sostenían que debía implementarse un sistema dividido en dos clases: los que producen (léase “trabajan”) y los que dirigen. Este sistema se alejaba de la democracia, considerada como un sistema inútil dado que –según esta perspectiva– quienes están destinados a “producir” no pueden “dirigir”. En este sistema ideal, el Ejército tendría el poder de controlar y la Iglesia, el de conducir espiritualmente a la Nación. El orden sustentado por estas dos instituciones garantizaría la paz y la eliminación del peligro comunista, de los conflictos entre clases sociales y las luchas obreras y populares.

“Denunciamos el sistema democrático como un régimen absurdo, porque abandona la suerte del país a las fluctuaciones sentimentales de la multitud”.

En Irazusta, Julio, El pensamiento político nacionalista. De Alvear a Yrigoyen, Buenos Aires, Obligado Editora, 1975.

CRISIS ECONÓMICA. MMIGRACIONES INTERNAS E INDUSTRIALIZACIÓN.

La crisis del capitalismo desatada en Estados Unidos en 1929 se diseminó a nivel internacional por los lazos de dependencia que imponía la División internacional del trabajo. Sus efectos no tardaron en llegar entonces a nuestra economía, traduciéndose en caída de las actividades y recesión. Desde la economía, la crisis derramó sobre la sociedad y la política. La desocupación, la falta de atinadas respuestas del gobierno de Yrigoyen, crearon una situación de malestar social que brindó el clima propicio para el golpe de Estado que, como vimos, derrocó al presidente radical en 1930. Pero la crisis económico-social no se detuvo con el retorno de la oligarquía al gobierno. La caída de la demanda externa de productos exportables se combinó con una disminución de sus precios, el aumento de los precios de las importaciones y el cese de inversiones y préstamos externos. Los gobiernos argentinos, el de Uriburu primero y luego el de Justo, se enfrentaron a una situación compleja, en la que faltaban las divisas para importar y en la que, además, se debía pagar la cuantiosa deuda externa de la Argentina sin poder recurrir –como era corriente– a nuevos préstamos. Además, para complicar aún más las cosas, Inglaterra firmó en 1932 un tratado comercial con sus ex colonias, Nueva Zelanda y Canadá, a través del cual se comprometía a comprar a dichos países las materias primas necesarias para su economía, relegando a un segundo lugar las compras de productos agropecuarios en la Argentina. Ahora bien, las decisiones que tomarían los gobiernos conservadores frente a la crisis implicaban ciertas contradicciones con el modelo liberal que hasta entonces se había sostenido. Aunque autoritaria y antidemocrática, la oligarquía argentina era de ideas liberales en lo que refiere al funcionamiento de la economía; recordemos que estaba conformada por terratenientes y comerciantes portuarios que se habían hasta entonces beneficiado de la relación especial establecida con el imperialismo británico a través de la División internacional del trabajo. Por lo tanto, el grupo dominante no acordaba con la intervención estatal como vía para salir de la crisis. No obstante, ese mismo grupo dominante aplicó desde el golpe de Estado de 1930 una serie de medidas de mayor intervención estatal en la economía que puso el énfasis en salvar los intereses de los sectores terratenientes. Por un lado, aumentó los impuestos aduaneros y estableció un control sobre el uso de las divisas, para limitar las importaciones y aumentar la recaudación del Estado. Con los recursos así obtenidos, creó la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, así como otras juntas reguladoras de la producción, para garantizar a los productores la venta de los bienes que ya no podían exportar. El Estado compraba a precios altos para mantener las ganancias sobre todo de los terratenientes, tendencia que también puede observarse en el Pacto Roca-Runciman.

El pacto roca-runciman En 1933, para que la Argentina asegurara las ventas de productos agropecuarios en Inglaterra (puestas en peligro por los acuerdos recientemente firmados entre Inglaterra, Canadá y Nueva Zelanda), el gobierno del general Justo envió a su vicepresidente, Julio Argentino Roca (hijo), a negociar con el representante del gobierno inglés en asuntos comerciales, Walter Runciman. Ambos delegados firmaron un acuerdo, conocido como el Pacto Roca-Runciman. Por este, se establecía que Inglaterra volvería a comprar a la Argentina la misma cantidad de carne enfriada que en 1932. Se beneficiaban así, además de los productores ganaderos, los frigoríficos que en la Argentina eran de propiedad inglesa y estadounidense. A cambio, los compromisos del Estado argentino fueron mucho mayores: todo el dinero obtenido por las exportaciones debía ser gastado en la compra de productos manufacturados ingleses y no se podía reducir las tarifas de los transportes que eran de propiedad británica. El tratado establecía también que los productos, como el carbón que las empresas británicas de ferrocarriles y las nuevas industrias debían importar, no pagarían impuestos aduaneros. El Estado argentino, además, se comprometía a proteger los intereses de los frigoríficos británicos limitando el avance de los capitales estadounidenses, así como los privilegios de las compañías inglesas de tranvías frente a las empresas nacionales de colectivos.

Por el modo servil en que la delegación argentina se presentó al acuerdo y por el tipo de decisiones que allí se tomaron, tan favorables a los intereses extranjeros, este pacto fue considerado por los nacionalistas como la expresión mayor de la entrega de la oligarquía argentina a los intereses británicos. El Estado, dirigido por los conservadores, también alentó un vasto plan de obras públicas que derivó en la construcción de una extensísima red caminera que copió el diseño de la red ferroviaria. Asimismo, creó el Banco Central de la República Argentina para fijar la cantidad de dinero que podía circular, respaldar a los bancos privados en caso de crisis financiera y regular el valor del peso. La creación del principal

banco argentino era de inspiración británica, y tuvo como protagonista al ministro de Economía de Justo, Federico Pinedo, quien sostenía que la Argentina era un país satélite y debía mantenerse en la órbita de las grandes naciones mundiales. El directorio del Banco Central estaba conformado por ingleses y además por representantes argentinos como Raúl Presbich, primer gerente general en la entidad designado desde la misma Inglaterra. Las medidas intervencionistas del Estado argentino tuvieron diversas consecuencias. Aunque dirigidas a salvaguardar los intereses de los sectores dominantes, como puede verse por ejemplo en la creación del Banco el pacto Roca-Runciman En 1933, para que la Argentina asegurara las ventas de productos agropecuarios en Inglaterra (puestas en peligro por los acuerdos recientemente firmados entre Inglaterra, Canadá y Nueva Zelanda), el gobierno del general Justo envió a su vicepresidente, Julio Argentino Roca (hijo), a negociar con el representante del gobierno inglés en asuntos comerciales, Walter Runciman. Ambos delegados firmaron un acuerdo, conocido como el Pacto Roca-Runciman. Por este, se establecía que Inglaterra volvería a comprar a la Argentina la misma cantidad de carne enfriada que en 1932. Se beneficiaban así, además de los productores ganaderos, los frigoríficos que en la Argentina eran de propiedad inglesa y estadounidense. A cambio, los compromisos del Estado argentino fueron mucho mayores: todo el dinero obtenido por las exportaciones debía ser gastado en la compra de productos manufacturados ingleses y no se podía reducir las tarifas de los transportes que eran de propiedad británica. El tratado establecía también que los productos, como el carbón que las empresas británicas de ferrocarriles y las nuevas industrias debían importar, no pagarían impuestos aduaneros. El Estado argentino, además, se comprometía a proteger los intereses de los frigoríficos británicos limitando el avance de los capitales estadounidenses, así como los privilegios de las compañías inglesas de tranvías frente a las empresas nacionales de colectivos. Por el modo servil en que la delegación argentina se presentó al acuerdo y por el tipo de decisiones que allí se tomaron, tan favorables a los intereses extranjeros, este pacto fue considerado por los nacionalistas como la expresión mayor de la entrega de la oligarquía argentina a los intereses británicos. UNIDAD 3 91

Central, de las Juntas reguladoras de la producción o en la firma del tratado Roca-Runciman, también crearon condiciones para una profundización del desarrollo industrial, y la consecuente diversificación de la economía. Las dificultades para comprar productos industrializados en Europa y Estados Unidos crearon una demanda que no podía ser satisfecha como hasta entonces por la vía de la importación. Esta situación y la existencia de una gran oferta de mano de obra barata, hicieron que distintos empresarios vieran en la industria el negocio más rentable para invertir sus capitales. Fue el caso de algunos grandes terratenientes afectados por el descenso de sus exportaciones agrarias. O el de muchos capitalistas extranjeros, sobre todo estadounidenses, que decidieron invertir en la Argentina para disputarle el mercado a los productos ingleses (que la Argentina se obligaba a comprar en virtud de lo firmado en el pacto Roca-Runciman). La fuerza de trabajo para estas nuevas industrias fueron los trabajadores urbanos y también los peones rurales que, desocupados por la crisis del modelo agroexportador, migraban a las ciudades cercanas y en especial a Buenos Aires, para conseguir empleo en las incipientes industrias. Esta gran cantidad de personas de origen provinciano, fue fuertemente discriminada, apareciendo pronto el mote CABECITA NEGRA.

Estos nuevos migrantes no fueron protegidos por el Estado; si conseguían trabajo en algún taller o fábrica, las jornadas eran interminables y recibían salarios que apenas les permitían asegurar su subsistencia. Tampoco el Estado se preocupó por sus necesidades de vivienda y, como consecuencia, los migrantes se establecieron en asentamientos precarios, cercanos a las fábricas, construidos sobre terrenos inundables y sin infraestructura de servicios sanitarios básicos: las "villas miseria". El proceso de industrialización, conocido como Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), adquirió en estos años una notable fuerza. Ya hacia fines de la década de 1930, la industria producía más riqueza y ocupaba más cantidad de mano de obra que las tradicionales actividades agrarias. Sin embargo, aunque ello implicaba indudablemente una complejización de la economía argentina, la industria tenía sus límites. Principalmente se desarrolló la industria liviana, con fuerte presencia del capital extranjero, en los sectores textil, de bienes de consumo, alimentos, productos químicos y electrodomésticos. La industria, muy extranjerizada, producía bienes de consumo no durables, y para sostener su crecimiento, debía importar maquinarias, herramientas, energía y otros insumos que no se fabricaban en el país. Es decir, era una industria dependiente y no integrada.

LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y LOS LÍMITES DE LA LUCHA.

A inicios de la década del 30, la crisis económica impactó profundamente a nivel social. Durante los primeros años, la desocupación aumentó tanto en la Capital Federal como en el resto del país. Además de las villas de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, en diversas zonas se instalaron ollas populares. Ambos fenómenos eran manifestaciones notorias de las dificultades que vivían los sectores trabajadores. En 1930 se había creado la Confederación General del Trabajo (CGT) pero a pesar de la unión de los diferentes sectores obreros, los dos primeros años de la dictadura fueron difíciles. Los líderes anarquistas y comunistas fueron encarcelados, torturados y obligados a exilarse. En el contexto de la

ley marcial y el estado de sitio, una Sección Especial de la Policía se creó para perseguir a los obreros. Hacia 1934 la economía argentina comenzó a mostrar indicios de recuperación gracias al proceso de sustitución de importaciones que hemos descrito. La situación de los obreros y de las organizaciones sindicales reflejaron estos cambios. Por un lado, la represión se aplacó, y por otro, el número de afiliados a los sindicatos comenzó a crecer. Hubo también un incremento de la acción sindical y de las huelgas y algunos de los resultados fueron favorables a los trabajadores. Sin embargo, durante los años de la década infame, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las leyes existentes parecían un sueño. En 1941, la llegada de Ramón Castillo a la Presidencia de la Nación representó un retroceso: nuevamente se recortaron libertades civiles, se declaró el estado de sitio y se inició una feroz persecución a los obreros, en particular a los de ideas comunistas. La crisis y las malas condiciones de vida de los sectores populares se reflejaron en la escritura, en la pintura y en el arte. Roberto Arlt, Raúl y Enrique González Tuñón y Raúl Scalabrini Ortiz reflejaron la situación social con su escritura. Antonio Berni representó en sus pinturas la pobreza y la marginalidad de los trabajadores, así como desde la música lo hicieron autores de tango como Enrique Santos Discépolo. Al tiempo que la situación de conflicto social se incrementaba, dentro del Ejército y de los sectores dirigentes, se produjeron fracturas y se develaron fuertes diferencias. En 1943, la década infame llegaba a su fin con un nuevo golpe de Estado que destituyó al presidente Ramón Castillo.

Actividad: Con este mismo material resuelve:

1.
 - a. ¿por qué se habla de una restauración o restablecimiento del régimen oligárquico en los años de 1930 en la Argentina? Tener en cuenta, ¿quiénes ejercen el poder político? ¿Cómo se mantienen en el poder? ¿Con qué métodos? ¿Cómo justifican esos métodos?
 - b. Relaciona el título del trabajo y el marco teórico con las imágenes arriba pegadas.
2. En nuestro país, durante la Segunda Guerra Mundial, surgieron intensos debates acerca de cuál debía ser la posición de la Argentina en el conflicto bélico. ¿Cuáles eran los argumentos enfrentados?
3. Identifica algunos de los problemas económicos que vivió la Argentina a principios de la década del '30 y las medidas aplicaron los gobiernos oligárquicos o conservadores para hacer frente a la crisis económica y social.
4. Analiza los factores que favorecieron el crecimiento industrial. ¿El mismo permitió la equidad social? Justificar.
5. Analiza la política de los gobiernos conservadores de esta etapa hacia los sectores trabajadores. Explica el surgimiento de las "Villa Miseria" y representa en imágenes las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores migrantes. Reflexiona una vez más sobre el intervencionismo del Estado en estos años. ¿A quiénes buscó beneficiar con sus intervenciones, a quiénes no tuvo en cuenta?